

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 21 de agosto de 2025

Vistos los autos: “Vanoli y Cía. S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, de los que

Resulta:

I) A fs. 35/52 se presenta Vanoli y Cía. S.A., quien deduce acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Salta, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, frente a la pretensión de que tribute el impuesto a las actividades económicas sin aplicar la exención prevista en el artículo 174, inciso w, del Código Fiscal provincial (decreto-ley 09/1975 y sus modificatorias, t.o. decreto 2039), puesta de manifiesto en la notificación del 6 de septiembre de 2017, cursada por la Dirección General de Rentas provincial.

Sostiene que ello contraviene los artículos 4º, 7º, 9º, 10, 11, 12, 16, 17, 28, 31, 75 –incisos 1º, 10, 13 y 18- y 126, todos de la Constitución Nacional, leyes federales, jurisprudencia y doctrina en la materia.

Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura. Desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos formales de procedencia de la acción declarativa.

Explica que la actora es una empresa cuya actividad principal consiste en la preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres, por la que tributa el impuesto a las actividades económicas bajo el régimen del Convenio Multilateral, con jurisdicción sede en la Provincia de Córdoba.

Alega que el 23 de agosto de 2017 informó a la demandada que, ante la manifiesta inconstitucionalidad del inciso w del artículo 174 del código fiscal local, en cuanto vedaba la aplicación de la exención allí prevista a aquellos

contribuyentes cuyo establecimiento industrial se encontrara ubicado fuera del territorio salteño, a partir del período fiscal 04/2017 aplicó la referida exención. Dice que la Dirección General de Rentas provincial, frente a ello, le cursó la notificación antes aludida, en la que se trasluce claramente el criterio de la provincia sobre el particular.

Se expaya en cuanto a los fundamentos de la acción intentada. En ese contexto, asevera que la pretensión provincial vulnera el principio de igualdad, viola la cláusula comercial y la prohibición de establecer aduanas interiores, todas previsiones de la Constitución Nacional.

II) Que a fs. 63/65 la accionante adjunta copia de la Resolución DGR Salta 482-18, en la que se determinó de oficio una eventual obligación tributaria por el impuesto a las actividades económicas, relativa a los períodos fiscales 07/17 a 01/18, y se le aplicó una multa. A su vez, a fs. 61/62 acompaña copia de la Resolución 76 del Ministerio de Economía provincial, por medio de la cual se rechazó el recurso jerárquico deducido por la demandante respecto a la Resolución 482-18 precitada. Por último, a fs. 73/74 agrega copia de las notificaciones de deuda 106505 y 106507, emitidas por la Dirección General de Rentas salteña.

III) A fs. 55 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 76/77 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa. A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito inicial, a fs. 57/58 y 60/66, por lo que dispuso –en resumen- que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la demandante las diferencias pretendidas en concepto de impuesto sobre las actividades económicas que se desprendían de la resolución 482-18, ratificada por la resolución 76 de 2019, en relación a las actividades “Preparación de conservas

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

de frutas, hortalizas y legumbres” y “Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y legumbres”, por los períodos fiscales 07 a 12 de 2017, con fundamento en el lugar de radicación de la planta industrial de la contribuyente y hasta la entrada en vigencia de la ley provincial 8064, todo ello hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.

IV) A fs. 103/128 la Provincia de Salta contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, señala que no se cumplen los requisitos de admisibilidad de la acción declarativa. Dice que la normativa atacada de inconstitucional –inciso w del artículo 174 del Código Fiscal- ha sido derogada mediante la sanción de la ley local 8064, del 7 de diciembre de 2017.

Relata que, en ejercicio de sus potestades tributarias, eximió del pago del Impuesto a las Actividades Económicas a las industrias cuyas plantas se encontraran radicadas en la provincia, con la finalidad de promover el desarrollo de industrias en su territorio y de generar fuentes de trabajo genuino para sus habitantes, lo que se relaciona expresamente con la cláusula prevista en el artículo 125 de la Constitución Nacional.

Asegura que la cláusula comercial no se encuentra vulnerada, y que la Provincia de Salta no ha efectuado un trato discriminatorio ni existe una múltiple imposición. Agrega que tampoco se incumple la prohibición de establecer aduanas interiores, ni los principios de igualdad y razonabilidad.

Finalmente, solicita que se declare abstracto el presente proceso, con costas por el orden causado. A ello se opone la accionante, en el pto. III de fs. 139/140.

V) Que frente al requerimiento formulado por el Tribunal a fs. 129, último párrafo, a fs. 131/132 la provincia accionada manifiesta que no existe “un caso o controversia materializada entre el Fisco Provincial y la parte actora”. Refiere también que no hay actividad de su parte “que ponga en peligro el o los derechos invocados...”.

VI) Que a fs. 147 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, donde opinó, en lo que aquí interesa, que correspondía hacer lugar a la demanda. Por último, a fs. 148, se pasan los autos a sentencia.

Considerando:

1°) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 76/77, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta, sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de una norma local, el artículo 174, inciso w, del Código Fiscal provincial (decreto-ley 9/1975 y sus modificatorias), a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En el presente caso, contrariamente a lo manifestado por la provincia accionada en el punto 4.2.1. de su contestación de demanda, reiterado a fs. 131/132 y a fs. 145, párrafo 1°, ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de la alícuota del impuesto a las

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

actividades económicas que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (ver notificación dispuesta el 6 de septiembre de 2017 y Resoluciones 482-18 y 76 de 2019, dispuestas en el marco del expediente administrativo 22-571.619/2017, cuyas copias obran a fs. 7/8, 63/65 y 61/62, respectivamente; así como las “notificaciones de deuda” agregadas en copia a fs. 73), demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421).

A esto tampoco resulta un óbice lo argumentado por la demandada respecto al dictado de la ley local 8064, ya que no produce efecto retroactivo alguno en relación a la normativa fiscal antes referida, ni tiene incidencia respecto a la pretensión provincial puesta de manifiesto en la documental detallada en el párrafo precedente.

3º) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 “Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4º) Que conforme a ello, en el caso concreto, la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, al denegar la exención indicada por la accionante y, en consecuencia, gravar con la alícuota del 3,6% la actividad industrial de la actora antes referida, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3° precedente, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el caso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación de la planta industrial de la contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13 y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Vanoli y Cía. S.A. contra la Provincia de Salta. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del requisito de que la producción de bienes sea efectuada en la Provincia de Salta, por empresas con planta industrial allí radicada, previsto en el artículo 174, inciso w, del Código Fiscal provincial (decreto-ley 9/1975 y sus modificatorias), así como la de la pretensión fiscal plasmada en el expediente administrativo DGR Salta 22-571.619/2017, exclusivamente en lo que fue materia de este proceso. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



CSJ 2099/2017

ORIGINARIO

Vanoli y Cía. S.A. c/ Salta, Provincia de
s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Vanoli y Cía. S.A.**, representada por su **letrado apoderado, doctor Fabián Orlando Cainzos**, con el patrocinio letrado de la **doctora María Mercedes Premrou**.

Parte demandada: **Provincia de Salta**, representada por su **letrada apoderada, doctora María Macarena Alurralde Urtubey**.